

CONCEPTO 020055 int 2324 DE 2025

(diciembre 12)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

<Publicado en la página web de la DIAN: 12 de diciembre de 2025>

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Unidad Informática de Doctrina

Área del Derecho	Tributario
Banco de Datos	Impuesto Sobre las Ventas - IVA
Descriptor	Declaraciones de IVA
	Marcación Sin Efecto Legal - SEL
Fuentes Formales	Artículo 83 de la Constitución Política
	Artículos 600 y 684 del Estatuto Tributario.
	Sentencias de la Corte Constitucional T- 729 de 2006, T-210
	Sentencias del Consejo de Estado Rad. 25406 de 2022 y Rad

Extracto

1. Este Despacho es competente para resolver las solicitudes de reconsideración de conceptos emitidos estipulado en el numeral 20 del artículo [55](#) del Decreto 1742 de 2020.

A. Solicitud de reconsideración.

2. Mediante el radicado de la referencia, se solicita la reconsideración del Concepto No. 00[3404](#) (in de forma subsidiaria, la aclaración del mencionado concepto, en lo que se refiere al numeral 2 del a declaraciones como SEL corresponden a un procedimiento habilitado por la DIAN y tal hecho es o)

3. A juicio de la solicitud, tal entendimiento es incorrecto, pues el sistema informático de la DIAN En consecuencia, considera que la marcación SEL no genera derechos u obligaciones por sí misma «ya que no existe en la normativa vigente disposición alguna que autorice tal consecuencia en los c

4. En apoyo de la solicitud, se invocan los efectos ex tunc derivados de la Sentencia del Consejo de la marcación «sin efectos legales» nunca debió existir, por carecer de fundamento legal.

B. El análisis de la solicitud.

5. El artículo [61](#) de la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo [600](#) del Estatuto Tributario (E.T. en a en la declaración del impuesto sobre las ventas, los periodos cuatrimestral y anual. El párrafo de informarse a la DIAN conforme a la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional.

6. En este contexto, fue expedido el Decreto [1794](#) de 2013^[1] que regulaba los efectos de las declarac compilado en el Decreto [1625](#) de 2016 Único Reglamentario en materia tributaria (DURT). Así, el

«Párrafo 2°. Los responsables cuyo periodo gravable es cuatrimestral o anual conforme a lo estat declaración del impuesto sobre las ventas en forma bimestral, deberán presentar la declaración de a que se hubieren presentado en periodos diferentes a los establecidos por la ley no tienen efecto lega dichas declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del impo propio).

7. El artículo [196](#) de la Ley 1819 de 2016 modificó nuevamente el artículo [600](#) del E.T., eliminando modalidades bimestral y cuatrimestral. Sin embargo, los efectos del párrafo 2° del artículo [1.6.1.1](#) del sistema informático de declaraciones la funcionalidad «Sin Efectos Legales (SEL)», para identificar declaraciones incorrectas, consideradas sin efectos legales.

8. La finalidad de esta herramienta era permitir que el contribuyente pudiera presentar una nueva declaración mediante el procedimiento técnico habilitado para subsanar el error, conforme a la interpretación contenida en el artículo [1.6.1.1](#) del DURT.

9. Sin embargo, el Consejo de Estado, mediante Sentencia del 3 de noviembre de 2022 (Exp. [25406](#) del DURT) que otorgaba a dichas declaraciones la condición de «sin efecto legal alguno», desconoció la interpretación jurídica no prevista en la ley –la ineficacia de la declaración–, afectando el principio de reserva de ley.

10. Esta sentencia, cuyos efectos ex tunc retrotrajeron la situación jurídica al estado anterior a la expedición de la sentencia del 7 de marzo de 2024 (Rad. [25666](#))^[5], se declarará la nulidad total del Consejo de Estado en cuanto a la interpretación jurídica con la anulación del reglamento que le servía de sustento. En dicho fallo, la Sala reiteró que sanciones vía reglamento, ni vía concepto, so pena de vulnerarse el principio de legalidad y el derecho de defensa.

11. Con ello, quedó consolidada la tesis jurisprudencial según la cual las declaraciones del impuesto sobre la renta producen efectos legales, tratándose de un error corregible dentro del procedimiento tributario ordinario.

12. Ahora bien, aunque la marcación SEL perdió su respaldo normativo, la habilitación de esta función para el contribuyente es oponible tanto para la Administración como para los contribuyentes, al generar una expectativa legítima de que la entidad para corregir el error, lo cual debe ser considerado bajo los principios de buena fe, confianza y seguridad jurídica.

13. El artículo [83](#) de la Constitución Política consagra el principio de la buena fe, según el cual: «Las relaciones entre el Estado y los ciudadanos se desarrollarán bajo pautas de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquejen a la Administración pública»^[7], exige que las relaciones entre el Estado y los ciudadanos se desarrollen bajo pautas de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquejen a la Administración pública^[8].

14. En ese sentido, la buena fe constituye el eje axiológico de la relación entre administración y administrado, y se manifiesta en la confianza legítima y el respeto por el acto propio^[9].

15. La confianza legítima se configura cuando los administrados desarrollan «expectativas razonables» de que la Administración mantendrá determinada situación jurídica, que le genera una «imagen de aparente legalidad de la conducta de la Administración»^[10]. Cuando, mediante actuaciones abruptas o sorpresivas, frustra la expectativa legítima de los administrados que la Administración actuará de manera abierta, pacífica y continua^[12] por parte de la administración^[13].

16. En ese sentido, la confianza legítima impone a las autoridades el deber de actuar con coherencia y transparencia, de modo que los signos externos, objetivos^[14] y reiterados en el comportamiento de la administración^[15], los cuales, acompañan con la confianza constitucionalmente protegida (art. [83](#)) que generan esas actuaciones de la administración no sólo es éticamente deseable sino jurídicamente exigible^[17].

17. Ahora bien, la Corte Constitucional ha desarrollado los presupuestos generales para que se predomine la confianza legítima:

17.1. La necesidad de preservar de manera perentoria el interés público;

17.2. La demostración de que el particular ha desplegado su conducta de conformidad con el principio de buena fe;

17.3. La desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la Administración y el particular;

17.4. La obligación de adoptar medidas transitorias para que el particular se pueda acomodar a la nueva situación jurídica.

parte de la Administración.

18. Respecto al segundo elemento, esto es «la demostración de que el particular ha desplegado su doctrina especializada le ha conferido especial importancia, en la medida que, al ciudadano que des parte del Estado, también está llamado a comportarse de manera honesta y diligente, esto es, debe Corte Constitucional, quien ha dicho que la conducta del administrado debe ser igualmente «honest una "persona correcta"»^[20].

19. De esta manera, el principio exige un comportamiento justo y leal de las partes, puesto que así defraudando la confianza surgida en aquellos con quien ella se relaciona, tampoco el administrado

20. Lo anterior, se complementa con el principio de respeto del acto propio –fundado en el aforismo quien ha generado una situación jurídica válida y eficaz pueda desconocerla posteriormente en detr

21. En suma, la confianza legítima y el respeto del acto propio impiden que la Administración desc contribuyentes actuaron y aplicaron este mecanismo de buena fe, máxime cuando esta situación tuv

22. Por tanto, conforme con lo expuesto, se concluye que:

22.1. Conforme con la sentencia del Consejo de Estado del 3 de noviembre de 2022 (Rad. [25406](#)), establecidos legalmente son válidas y producen efectos jurídicos, al tratarse de un error de periodic procedimiento tributario^[24].

22.2. Las declaraciones marcadas como «Sin Efectos Legales (SEL)» generan una situación jurídica contribuyentes, en virtud de los principios de buena fe, confianza legítima y la teoría del respeto po SEL no tienen efectos legales.

23. No obstante, es necesario precisar que la marcación SEL debe analizarse a la luz de su naturaleza implementación, esto es, permitir la presentación de una nueva declaración del impuesto sobre las

24. En efecto, el contribuyente que accedió al sistema y marcó su declaración bajo la funcionalidad por el ejecutivo materializada por la propia Administración tributaria– de que dicho procedimiento declaración posterior. Así, el núcleo de la oponibilidad de la marcación SEL no radica en su mera e concebida y en la expectativa legítima que dicha finalidad generó en el contribuyente. Expectativa

25. Por el contrario, el uso de la marcación SEL con fines distintos a los previstos originalmente –c dejar sin efecto declaraciones válidas sin presentar la nueva declaración correspondiente, entre otro precisamente de esa finalidad que conecta la conducta del contribuyente con el propósito legítimo

26. Lo anterior, en el entendido de que la confianza legítima no reviste carácter absoluto, sino que Consejo de Estado ha precisado que este principio no protege situaciones irregulares o ilegales^[27], relaciones entre la Administración y los administrados. Por el contrario, la Administración conserv advierte que la conducta del particular resulta incompatible con la legalidad, sin que ello configure incluso, la conducta del contribuyente por fuera de los parámetros legales puede dar lugar a la confi consuma con el propósito de inducir a error al servidor público sin que se requiera la obtención de

27. De este modo, la protección de la confianza legítima se proyecta únicamente sobre las situaciones herramienta marcación SEL. Así, cuando se hace uso ilegítimo de la marcación SEL, el contribuye fraude procesal pues con su actuar induce a error a la administración.

28. En consecuencia, en los casos en que se evidencie un uso indebido de la marcación SEL, la Adi

10. Cfr. C. Const. Sent., T-436, jun. 12/2012. M.P. Adriana Maria Guillen Arango
11. Cfr. C. Const. Sent., T-204, abr. 1/2014. M.P. Alberto Rojas Rios.
12. Cfr. C. Const. Sent., T-067, feb. 3/2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez
13. Vargas, Magda. 2023. El principio de confianza legítima como fuente de la responsabilidad ext imputación. Rev. Fac. Derecho Cienc. Polit. - Univ. Pontif. Bolivar. vol.53 no.138 Medellín, June 2023.
14. Viana, María. El Principio de Confianza Legítima en el Derecho Administrativo Colombiano. I
15. Vargas, Magda. 2023. El principio de confianza legítima como fuente de la responsabilidad ext imputación. Rev. Fac. Derecho Cienc. Polit. - Univ. Pontif. Bolivar. vol.53 no.138 Medellín, June 2023.
16. Cfr. C.E. Secc. Tercera, Subsección B. Sent., de agost. 31/2015. Exp. 22637. C.P. Ramiro de Je
17. C. Const. Sent., SU-360, may. 19/1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
18. Cfr. C. Const. Sentencias T- 729 de 2006, T-210 de 2010, T-908 de 2012.
19. Valbuena, Gabriel. La Defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Critica Desde la Universidad Externado de Colombia, 2008. p.174.
20. Cfr. C. Const. Sent., T-475, jul. 29/1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
21. Cfr. C. Const. Sent., T-364, may. 20/1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
22. «No se puede ir contra los propios actos»
23. Cfr. C. Const. Sent., T-295, may. 4/1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero
24. Cfr. Concepto DIAN 007585 int 712 de 2023.
25. En efecto, pretender que la administración desconozca dicha marcación con base en la nulidad o conducta leal y de buena fe del contribuyente, quien, siguiendo las directrices del sistema, presentó situaciones son precisamente las que protege el principio de confianza legítima, al evitar que el Est perjuicio de quienes confiaron razonablemente en ellas.
26. Cfr. C. Const. Sent. C-131, feb. 19/2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
27. Cfr. C.E. Secc. Cuarta. Sent., de feb. 26/2015. Rad. 11001-03-15-000-2014-01114-01(AC). C.F
28. Cfr. C.E., Secc. Segunda, Subsección A. Sent., de mar. 31/2016. Rad. 11001-03-15-000-2016-C
29. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 29 de agosto de 2018. R:



Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda.

Co-creación, mantenimiento, actualización y ajustes de estructura relacionados con la consulta jurídica Casa Editorial SAS.

ISBN 978-958-53111-3-8

Última actualización: 30 de diciembre de 2025 - (Diario Oficial No. 53.335 - 15 de diciembre de 20

